



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

En Buenos Aires, a de febrero de 2026, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso interpuesto en la causa **“FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que, por sentencia del 26/9/24, el señor juez de primera instancia (i) **rechazó la acción declarativa** promovida por Fondomonte South América S.A. (en adelante, “Fondomonte”) contra la ex Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (actual ARCA) y la **acción de repetición** pretendida; (ii) impuso **las costas** a la actora vencida; y (iii) pospuso la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta el momento en que quedara firme su pronunciamiento.

Para resolver en tal sentido, recordó que la actora había promovido una acción en los términos del art. 322 del CPCCN, contra el Fisco Nacional, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 93, primer párrafo y 194 de la ley 20.628, de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019 y sus modif.); del artículo 39 de la ley 24.073; de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, y de toda otra norma que le impidiera actualizar y/o ajustar por inflación los 5/6 que la ley no permitía computar en el período 2019, al diferirlos. Sobre tal base, la accionante solicitó que se autorizara la actualización por Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (“INDEC”), de las porciones del crédito postergadas a 5 períodos del ajuste por inflación practicados en 2019, y se condenara a la ex AFIP-DGI a la restitución de las sumas que arrojase cada actualización. Además,



requirió la devolución de la suma de **\$33.445.929,26**, resultante de la actualización por IPC del segundo sexto período de base (2019), que había abonado en virtud de la presentación de la DDJJ del período fiscal 2020.

En primer lugar, el magistrado examinó la procedencia de la vía. Para ello, destacó que la acción pretendía la declaración de inconstitucionalidad de una norma, y que los requisitos de procedencia de esa acción eran la falta de certeza y la lesión actual o, en otros términos, la incertidumbre y la existencia de caso. En ese sentido, señaló que el segundo de los requisitos se encontraba fundado en el “Acta Nro 35-25-Jun-2020” publicada en la sección “Espacio de Dialogo Entidades Profesionales – AFIP” de la página *web* de la demandada, de donde surgía que, frente a una consulta sobre la imputación en sextos, esta última había contestado, *“El monto correspondiente al ajuste por inflación impositivo —positivo o negativo— cuyo cómputo sea diferido de acuerdo con el artículo 194 de la ley del tributo no es susceptible de actualización, pues ello no está previsto en el citado artículo. Por lo tanto, corresponde su cómputo a valores históricos”*. El *a quo* concluyó que tales afirmaciones constituían un *“contexto normativo o administrativo cuya adecuación a la Constitución Nacional el peticionante puede tener legítimo interés en esclarecer de forma inmediata, sin estar obligado a propiciar o soportar un acto administrativo que concrete su agravio”*, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente *“Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho”* (sentencia del 20/2/18).

Con relación al fondo de la cuestión, el *a quo* aclaró que la pretensión de Fondomonte no era la inconstitucionalidad de la norma en sí —art. 194 de la LIG— sino la actualización por IPC de la porción diferida, extremo que se hallaba jurídicamente vedado. En este sentido, refirió que la literalidad de la norma no permitía efectuar interpretaciones forzadas más allá de la exégesis literal, argumentando que no hacía referencia a la actualización de ese crédito ni mencionaba un índice para ello. Agregó que la pretensión de Fondomonte implicaba subvertir el bloque normativo federal que prohibía la indexación, arrogándose el papel del legislador y presuponiendo su imprevisión, lo que era inadmisibile. Además, refirió que el mecanismo de ajuste por inflación implicaba una forma de actualización por lo que, de admitirse la aplicación de otro índice se estaría repotenciando un crédito.

En consecuencia, rechazó la acción deducida.

Por su parte, con relación a la repetición del impuesto a las ganancias, período fiscal 2020, el *a quo* destacó que no se encontraba agregado en autos la constancia de pago (“VEP”) del monto indicado en la declaración jurada, extremo que de por sí era suficiente para rechazar esa pretensión. Sin perjuicio de ello, señaló que las consideraciones efectuadas para rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad también resultaban aplicables a la repetición.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, **la actora** interpuso recurso de apelación el 4/10/24, que fue concedido libremente el 8/10/24.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

Puestos los autos en la Oficina, expresó sus agravios el 1/11/24, que fueron contestados el 21/11/24.

Finalmente, el 8/4/25 se expidió el señor **Fiscal General**.

3º) Que, la actora se agravia de que:

(i) la sentencia no trata la confiscatoriedad alegada y probada en el proceso, que es la cuestión central y conducente para decidir el caso. Sostiene que la imposibilidad normativa de actualizar el crédito resultante de la aplicación del ajuste por inflación impositivo y diferido en los cinco períodos fiscales subsiguientes resulta confiscatoria y priva de efectos al referido mecanismo de ajuste, resultando por lo tanto inconstitucional el bloque normativo en general y el art. 194 de la LIG.

Manifiesta que la aplicación del bloque normativo lleva a determinar un impuesto que insume una porción sustancial de la renta, excediendo cualquier límite razonable de imposición. En este sentido, refiere que la imposibilidad de actualizar el crédito que arrastra del ejercicio anterior y a computar en la declaración jurada del período fiscal 2020 conlleva una desvalorización sustancial que representa un 36,14% para el año 2020 (v.g., la variación del nivel general -IPC- publicada por el INDEC para dicho período fiscal).

Agrega que se encuentra demostrado en la certificación contable y en la pericia el daño que sufre por causa del proceso inflacionario, al no poder actualizar el crédito resultante de la aplicación del ajuste por inflación sobre el resultado impositivo del período fiscal 2019. En ese orden de ideas, sostiene que aplicando el bloque normativo impugnado —diferimiento en sextos sin actualizar— se produce una desvalorización total del crédito proveniente del ajuste por inflación para el período 2019, que lleva a desvirtuar su aplicación.

Explica que: *“Además, cobra también relevancia lo expuesto por la Sra. perito en el punto 4.a) de su informe, consistente en determinar la tasa efectiva del gravamen computando en su totalidad (100%) el resultado del ajuste por inflación*



*impositivo. Allí, la perito llegó a la conclusión que mediante el cómputo del 100% del Ajuste por Inflación resultante de la declaración jurada del 2019, la tasa efectiva del impuesto asciende al 138%. Esta circunstancia es reveladora de la situación más gravosa que se le genera a mi mandante si se le impide actualizar esos sextos que el bloque normativo le ordena diferir sin actualización, cuestión que fue totalmente omitida por el a quo.”. Por ello sostiene que se configura un supuesto de confiscatoriedad que habilita la aplicación de la actualización de las cuotas y que la declaración de inconstitucionalidad del bloque normativo, en general, y del art. 194 de la LIG, en particular, tiene como inmediata consecuencia la procedencia de la actualización solicitada y no prevista por el referido art. 194 —al ordenar que se impute “en partes iguales” y no permitir la actualización—.*

Con relación a lo dispuesto por el *a quo* respecto de la “repotenciación del crédito”, aduce que el diferimiento “en sextos” sin actualización elimina el tratamiento de la inflación e implica una desvalorización sustancial que representa un 36,14% para el año 2020, *in crescendo* a 105,49% para el 2021, llegando al 200,5% para parte del 2022.

(ii) el pronunciamiento afectó el principio de congruencia, al desestimar la repetición invocada por no haber presentado la constancia de pago, toda vez que ello no fue un planteo introducido por la demandada. Destaca que la AFIP no lo propuso porque la declaración jurada de impuesto a las ganancias del período fiscal 2020 se canceló mediante compensación y ello fue aprobado por el propio Fisco.

5º) Que, el 30/10/24, se confirió vista al **Ministerio Público Fiscal** para que se expidiera respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad involucradas en autos.

En dicha oportunidad, señaló los parámetros tenidos en cuenta por la Corte federal para que exista confiscatoriedad y destacó que, para comprobar la violación al derecho de propiedad, aquélla había hecho especial referencia a la actividad probatoria desplegada por los interesados, requiriendo una prueba “concluyente” acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada, análisis que remitía a una valoración ajena, como principio, al cometido legalmente impuesto a ese Ministerio Público Fiscal.

6º) Que, en primer lugar, cabe recordar que, mediante la acción iniciada, la actora solicitó que “*se declare la inconstitucionalidad de los arts. 93, primer párrafo, y 194 de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias (t.o. 2019, con las sustituciones, modificaciones y agregados establecidos por las leyes 27.468 y 27.541, en adelante e indistintamente, LIG), del art. 39 de la ley 24.073, de los arts. 7º y 10º de la ley 23.928 (con las modificaciones introducidas por el art. 4º de la ley 25.561 y las efectuadas por el art. 5º y 6º de la ...) [sic] y de toda otra norma legal o reglamentaria (en adelante e indistintamente, el bloque normativo), en tanto le impiden actualizar y/o ajustar por inflación el crédito que resulta de la aplicación del ajuste por inflación impositivo (Título VI de la LIG), en la declaración jurada del período fiscal 2019 (período base), al momento de computar el crédito diferido en los períodos fiscales subsiguientes conforme con el mecanismo de diferimiento en cinco (5) períodos que establece el citado bloque*





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

*normativo”. En consecuencia, requirió que se la autorizara “a actualizar el mencionado crédito diferido en base al Índice de Precios al Consumidor, publicado por el INDEC (“IPC”), desde el período base (2019) en que se genera dicho crédito hasta el momento de su efectivo cómputo en las liquidaciones del impuesto correspondiente a períodos fiscales posteriores”. Además, con el fin de evitar que se consumaran perjuicios económicos, la actora requirió una **medida cautelar** para “actualizar conforme con el IPC que publica el INDEC, el crédito diferido que surge de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación del impuesto a las ganancias del período fiscal 2019, en la porción que le corresponde imputar en la determinación del gravamen del período fiscal 2020” (v. presentación del 11/2/21). Esta última petición fue rechazada por el juzgado de primera instancia el 23/4/21.*

Posteriormente, Fondomonte amplió demanda solicitando la devolución de **\$33.445.929,26**, importe que surgía de la actualización por el IPC del sexto resultante del mecanismo de ajuste por inflación del período base (2019), cuya aplicación había sido diferida a la declaración jurada del período fiscal 2020. Al respecto, explicó que, ante el rechazo de la medida cautelar, había presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias —período fiscal 2020— aplicando el sexto diferido sin ajuste por inflación, y que la falta de actualización de dicho sexto generó que “*la inflación confisque en términos de capacidad contributiva, el valor real del crédito*”. Agregó que “*la imposibilidad de actualizar el crédito a computar en la declaración jurada del período fiscal 2020 que arrastra del período fiscal base, conllevó a una concreta desvalorización del 36,14%, medido frente a la inflación registrada por el IPC publicado por el INDEC*” y que, en esas condiciones, el bloque normativo vulneraba su derecho de propiedad y el principio de capacidad contributiva (v. fs. 4/5 de la presentación del 2/8/21). Como prueba documental acompañó copia de la declaración jurada del IIGG del período fiscal 2020, presentada el 13/5/21, donde se aplicó el segundo sexto del resultado del mecanismo de ajuste por inflación del período fiscal base (2019).



7º) Que, en este contexto y de acuerdo con lo descripto, la presente causa comprende: **(i)** una acción declarativa de inconstitucionalidad de aquellas normas que impiden a la actora actualizar los 5/6 diferidos a los períodos fiscales inmediatos siguientes, resultantes de la aplicación del ajuste por inflación impositivo en la declaración jurada del período fiscal 2019 (período base) y, como consecuencia de ello, la petición de actualizar cada sexto; y **(ii)** la devolución de **\$33.445.929,26** correspondiente a la actualización por IPC del sexto (correspondiente al período fiscal 2019) imputable a la declaración jurada del impuesto a las ganancias período fiscal 2020.

8º) Que, resulta necesario verificar, en primer término, si la demanda de autos cumple con los requisitos que el art. 322 del CPCCN establece para la procedencia formal de las acciones meramente declarativas (cfr. Fallos: 304:310 y su cita; 307:1379; 310:606; 311:421 y 325:474, entre muchos otros), que consisten en, *(i)* que exista un estado de incertidumbre respecto de una relación de derecho; *(ii)* que ello produzca un perjuicio o una lesión a quien la ejerce y *(iii)* que la falta de certeza no pueda ser remediada por medio de otro procedimiento legal idóneo a tal fin (cfr. esta Sala, “*Scardiglia, Daniel César c/ Estado Nacional y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad*”, sentencia del 14/4/2015; “*Industrial Systems S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ proceso de conocimiento*”, sentencia del 17/11/2016; y “*Consejo Profesional de Ingeniería Química c/ Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento*”, sentencia del 5/9/2017, entre otros). Dichos requisitos resultan revisables incluso de oficio, porque lo contrario importaría permitir que se contrarie lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional en cuanto a que la Justicia federal actúa exclusivamente ante “causas”, sin que le quepa la misión de emitir opiniones en abstracto (Fallos: 322:528, cons. 3º).

Al respecto —y aunque resulte evidente—, no está de más recordar que todo proceso judicial requiere, *invariablemente*, que la pretensión que en él se deduzca suponga la existencia de un “caso”, “causa” o “controversia” en la que ella se inserte, de modo que habilite la intervención válida de un tribunal de justicia (art. 116 C.N.). Ello es así, aun en la hipótesis de la acción contemplada en el art. 322 CPCCN, la cual (como se ha dicho sin ambages) no puede exhibir un carácter simplemente consultivo ni importar una indagación meramente especulativa (arg. Fallos: 331:337; 332:1704 y 333:364, entre muchos otros). Y ello, porque mediante este tipo de procesos se busca precaver los efectos de un “*acto en ciernes*” al que se atribuye ilegitimidad y potencial aptitud para lesionar el régimen constitucional federal, así como fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (cfr. Fallos: 307:1379; 311:421; 320:1556; 325:474 y 333:487 entre otros). De ahí que se ha señalado que, “*es imprescindible comprobar la existencia de un ‘caso’ (art. 116 de la Constitución Nacional y art 2º de la ley 27) ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad*” (Fallos: 332:111; 339:1223, entre otros).





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

La Corte federal tiene dicho que, sin perjuicio de que no se requiere que el daño esté consumado, dado el carácter preventivo de la acción, es necesario (i) que medie una actividad administrativa que afecte un interés legítimo; (ii) que el grado de afectación sea *suficientemente directo* y (iii) que *aquella actividad tenga concreción bastante* (Fallos: 307:1379; 326:4774; 328:502 y 3586; 334:236, entre otros). En particular, destacó que en nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial es una condición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito *sine qua non* de su accionar (art. 116, Constitución Nacional; art. 2º, ley 27) y que este requisito, ineludible para habilitar la intervención del Poder Judicial de la Nación, es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento en la sentencia (Fallos: 330:5111; 331:2257; 340:1084; 343:1259; 345:1312; entre otros).

En función de tales parámetros, cabe señalar que la actora fundó la procedencia de la vía en el “bloque normativo” y en la manifestación expresa realizada por el organismo recaudador en el “Espacio de diálogo - entidades profesionales” (registrada en el acta n° 35, del 25/6/20) respecto a la imposibilidad de actualizar los 5/6 diferidos por el citado art. 194. En este sentido, la accionante manifestó que *“en el presente caso el “bloque normativo” hace manifiesta la existencia del interés jurídico suficiente requerido por la acción en trato, toda vez que, dicha prohibición de actualización causa a mi mandante un grave perjuicio que, en función a la decisión que se adopte, podrá significar un resultado confiscatorio, en tanto absorbe una porción sustancial del crédito, que excede cualquier límite razonable”* (v. págs. 52/57 de la presentación del 11/2/21).

Por su parte, el Fisco Nacional, al contestar demanda, manifestó que la acción iniciada resultaba improcedente por prematura y conjetural, agregando que no había un acto administrativo que pudiera ser cuestionado. En este sentido, sostuvo que no se



configuraba en el presente caso un daño real o concreto, actual o inminente, que la actora pretendiese que culminara o que quisiese evitar (v. presentación del 15/12/21).

En este contexto, es claro que en autos **no se encuentra configurado un “caso” o “causa” que justifique la actuación del Poder Judicial**, toda vez que Fondomonte no demostró la existencia de una actividad administrativa que, en forma actual, pusiera en peligro sus derechos constitucionales. Además, según las propias manifestaciones efectuadas al inicio de la acción, *la actora tributó el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019, objeto de autos, conforme a la normativa vigente* y lo que cuestiona es la imposibilidad de actualizar los 5/6 restantes imputables a los períodos fiscales inmediatos siguientes, lo que torna a la cuestión en prematura y conjetural. Tal es así que luego, para el período fiscal 2020, Fondomonte encauzó su pretensión mediante repetición, lo que excluye la procedencia de la vía aquí analizada.

Sólo a mayor abundamiento y bajo esa misma lógica procede señalar que tampoco resulta aplicable lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “*Cepas Argentinas S.A. c/ Córdoba, provincia de s/ acción declarativa de certeza*” (Fallos 348:405) toda vez que el perjuicio alegado por la actora no radica en la aplicación de la normativa vigente al ejercicio fiscal 2019 sino aquél que tendría en los períodos fiscales inmediatos siguientes (2020 a 2024) ante la imposibilidad de ajustar cada uno de los sextos, circunstancia conjetural al momento de iniciar la acción y que, además, no se encuentra comprobada en autos.

9º) Que, con relación a la **acción de repetición** del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020, cabe recordar que el 2/8/21 la actora solicitó la devolución de **\$33.445.929,26** equivalente a la actualización por el IPC publicado por el INDEC del sexto diferido correspondiente al ajuste por inflación del período fiscal 2019. Para fundar dicho pedido sostuvo que la porción a computar en el ejercicio 2020 tuvo una pérdida de valor real producto de la inflación generando una confiscación en términos de capacidad contributiva de ese sexto.

En primer lugar, con relación a la procedencia formal de la vía, cabe destacar que la circunstancia de que el monto objeto de la repetición intentada haya sido cancelado por medio de compensaciones no obsta a su procedencia (v. documentación presentada el 4/11/24). En efecto, al no haber mediado un rechazo de la compensación efectuada por Fondomonte, la repetición intentada no provocaría un perjuicio al erario. En ese mismo sentido, el Tribunal tiene dicho que la acción de repetición es procedente aun cuando el tributo hubiera sido objeto de compensación, pues el importe que se repite fue ingresado al aceptarse la compensación por parte del ente fiscal, que avaló que las sumas eran líquidas y exigibles (cfr. esta Sala en “*Central Térmica Loma de La Lata Sociedad Anónima c/ ENAFIPDGI y Otros s/ Dirección General Impositiva*”, sentencia del 30/8/16).

Con relación al fondo de la cuestión, en primer lugar, es dable mencionar que el art. 194 de la ley de la gabela de marras, vigente durante el período fiscal en trato, establece que “*El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a*







Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

*que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes. Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”. En este escenario, la actora solicitó mediante la acción de repetición que el sexto imputable al ejercicio 2020 (correspondiente al ajuste por inflación del período fiscal 2019) se actualizara por inflación conforme al IPC del INDEC sosteniendo que al no haber podido hacerlo se generó una confiscación, en términos de capacidad contributiva. Por lo tanto, el análisis se ciñe en determinar si existió una afectación del derecho de propiedad de la actora por no haber podido actualizar ese valor imputable al ejercicio 2020.*

En este contexto, corresponde recordar que la Corte tiene dicho que *“para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital”* (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:57; 314:1293; 322:3256; 328:4542; 332:1571). Ese tribunal también ha afirmado que *“en razón de las cambiantes circunstancias del país —e incluso bajo las mismas circunstancias— la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que la determinación del límite varíe en más o en menos. Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo (Fallos: 210:855, 1208). En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega*



(Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, *entre otros*)” (Fallos 332:1571, considerando 7º, subrayado añadido).

En este orden de ideas, a fin de probar la afectación al derecho de propiedad, Fondomonte solicitó al perito que informase:

(i) “*el monto del crédito resultante de la aplicación del ajuste por inflación del período fiscal 2019, computable en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2020 a 2024*” y en particular, respecto del ejercicio 2020, el perito informó un monto de \$92.543.954,82 (v. pericia presentada el 8/9/22).

(ii) la actualización de “*los montos del punto 3.III*) ———que son los referidos *supra*——— *utilizando la variación de los índices de precios al consumidor, nivel general (IPC) suministrado por el INDEC*” y en particular, respecto del ejercicio 2020, el perito informó un total de **\$125.989.884,07** (v. pericia presentada el 8/9/22).

De la información transcripta, se observa que el monto objeto de repetición es la diferencia entre el sexto imputable al ejercicio 2020 actualizado conforme al IPC y ese mismo sexto sin actualizar.

En este contexto, en “*Candy*” (Fallos 332:1571) la Corte federal explicó que “*el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ya que “tal compulsión no trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada”, máxime habida cuenta de que para que proceda la declaración de inconstitucionalidad se requiere que tal repugnancia sea “manifiesta, clara e indudable” (arg. de Fallos: 314:424; 320:1166)*” (considerando 4º).

Esta misma lógica es la que aplica a la repetición aquí analizada, en efecto, la comparación entre el sexto imputable al ejercicio 2020 y ese monto ajustado por un índice de INDEC no logra demostrar que la imposibilidad de actualizar dicha suma le hubiera provocado la aplicación de una alícuota efectiva en el Impuesto a las Ganancias que resultara confiscatoria, entendida como la configuración de una desproporción de tal magnitud que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley pretende gravar (Fallos: 332:1571); circunstancia que sella la suerte adversa de la repetición sobre la base del argumento de la confiscatoriedad al se ciñó el planteo de la actora (v. presentación del 2/8/21; cfr., *a contrario sensu*, esta Sala en “*Roemmers SAICF (TF 48918-I) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo*”, sentencia del 10/7/25).

**10)** Que, en lo que respecta a la imposición de **las costas**, atento la forma en la que se decide y que no se advierten motivos excepcionales que permitan





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

apartarse del principio rector en la materia, corresponde imponerlas en ambas instancias a la actora sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

En función de lo expuesto, oído el Sr. Fiscal General, **VOTO** por:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada en los términos del presente decisorio, con costas (conf art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán dijo:

1º) Que, concuerdo con la reseña de antecedentes efectuada por mi distinguido colega en el voto que precede, a la cual me remito por razones de brevedad.

2º) Que, a través de la acción declarativa intentada, la parte accionante solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 93, primer párrafo, y 194 de la ley n° 20.628 (t.o. 2019), del art. 39 de la ley n° 24.073 y de los arts. 7 y 10 de la ley n° 23.928; y, a partir de ello, requirió que se la habilite en los períodos fiscales 2021 a 2024 a actualizar los sextos diferidos resultantes del ajuste por inflación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2019.

Aclarado ello, debo señalar que adhiero a lo manifestado por el vocal preopinante en cuanto a que la admisibilidad de la referida acción puede ser revisada de oficio y que, en este caso en concreto, debe ser declarada formalmente inadmisibile.

Esto último, dado que, al contestarse la demanda de autos –momento procesal en el cual, por excelencia y por regla general, el litigante accionado puede tomar conocimiento del planteo actoral y enunciar con amplitud y eficacia sus principales argumentos y defensas–, ni siquiera mediaba entre las partes las relaciones jurídicas tributarias sobre las cuales la accionante pretendía establecer una controversia (impuesto a



las ganancias, períodos fiscales 2021 a 2024). Y, desde ya, tampoco se habían presentado las declaraciones juradas correspondientes.

Todo esto, lleva necesariamente a que el planteo actoral haya sido netamente conjetural y que, en consecuencia, no se haya verificado en autos ninguno de los requisitos necesarios a efectos de que la acción declarativa entablada resulte formalmente admisible, en los términos que prevé el art. 322 del código ritual; los cuales, para causas de este tipo, fueron enumerados y detallados en el considerando 8° de mi voto *in re* “*Marlew SA c/ EN - AFIP s/ Proceso de Conocimiento*” (expte. 17779/2020, sentencia del 13/11/2025).

Por consiguiente, corresponde modificar el pronunciamiento de grado en el sentido expuesto.

3°) Que, en lo que respecta a la acción de repetición del impuesto a las ganancias (período fiscal 2020), considerando que en autos se encuentran en disputa cuestiones constitucionales y concordando con los fundamentos y conclusiones del voto que antecede, entiendo que aquélla resulta formalmente admisible.

Sentado ello, entiendo que corresponde hacer lugar a la repetición solicitada y, por consiguiente, ordenar el reintegro a la actora de lo abonado en exceso en concepto del referido gravamen fruto de no haber actualizado por inflación la cuota 2 de 6 del ya mencionado ajuste –practicado para el período fiscal 2019–.

Ello, por cuanto, conforme los argumentos expuestos en el considerando 14 de mi voto *in re* “*Marlew SA*” (citada *supra*), la actualización que pretende la actora se encuentra legalmente permitida; por lo que corresponde acceder a su pedido sin necesidad de adentrarse en el planteo constitucional que aquélla formuló a efectos de sustentar su pretensión.

Es que la parte demandante cimentó dicho planteo sobre la base de considerar prohibida a la actualización de la segunda cuota diferida del ajuste por inflación practicado en el período fiscal 2019 –utilizable en el período fiscal 2020–. Esto, a partir de la equivocada interpretación que la demandada propugnó y defendió en estos actuados respecto de la normativa que instituye el diferimiento tratado en autos. Sin embargo, tal y como se sostuvo en el voto antes indicado, “*lo cierto es que esa interpretación legal propiciada por el ente fiscal desatiende la prístina finalidad que posee el mecanismo de ajuste por inflación autorizado por el legislador para la actora en el período fiscal aquí involucrado*”. Asimismo, cabe indicar que la tesitura del ente fiscal ignora que las disposiciones textuales del art. 194 de la ley n° 20.628 no hacen más que armonizar el plano literal de la norma con su finalidad y que aquéllas también se dirigen a admitir la actualización en cuestión.

De ese modo, por razones de brevedad corresponde sin más remitirse a los lineamientos trazados en el voto referido, acceder a la actualización pretendida para el





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL  
SALA IV

**Expte. CAF 18209/2020/CA1: “FONDOMONTE SOUTH AMERICA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”**

periodo fiscal 2020, modificar parcialmente la sentencia de grado y admitir la repetición solicitada.

4º) Que, el índice a aplicar a efectos de practicar la actualización referida en el considerando anterior, será aquél pretendido por la accionante y utilizado por la experta contable en su pericia (Índice de Precios al Consumidor). Ello, dado que en esta instancia la demandada no ha rebatido dicho índice con la debida contundencia ni ha defendido la aplicación de uno diferente para el caso en que resulte procedente la indexación solicitada por la parte actora –como finalmente aconteció–; no existiendo, por ende, controversia a este respecto.

Aclarado ello, cabe precisarse que el crédito reconocido tendrá que ser abonado conforme las previsiones de la ley n° 23.982 (cfr. esta Sala *in re* “*GE Oil & Gas Products & Services Argentina SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Direccion General Impositiva*”, expte. 49715/2016, sentencia del 07/08/2025, entre muchos otros). A su vez, las sumas a restituir devengarán intereses, los cuales se calcularán desde la ampliación de demanda de fs. 106/110 –momento en el cual se reclamó la repetición aquí admitida– a la tasa prevista en las resoluciones (MH) n° 598/2019, (ME) n° 559/2022 y (ME) n° 03/2024 –y sus modificatorias–, hasta su efectivo pago (cfr. esta Sala *in re* “*Fauvety, Martha Adelina c/ EN - AFIP s/ Amparo Ley 16.986*”, expte. 16973/2020, sentencia del 08/02/2022; y “*Salentein Fruit SA (TF 33117297-I) c/ Direccion General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo*”, expte. 14069/2025, sentencia del 11/12/2025, entre muchos otros).

5º) Que, en cuanto a las costas, a partir de la existencia de vencimientos mutuos y en función del carácter novedoso que exhibe la cuestión en debate, considero que corresponde distribuir las costas por el orden causado en ambas instancias (cfr. art. 68, segundo párrafo, y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; como así también mi voto *in re* “*Marlew SA*”, citado *supra*).



En función de lo expuesto y oído el señor fiscal general, **VOTO** por:

**1º)** Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y modificar el pronunciamiento de grado, con los alcances expresados en los considerandos 2º a 4º de este voto.

**2º)** Distribuir las costas del proceso por su orden (cfr. considerando 5º de este voto).

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti adhiere al voto del Dr. Marcelo Daniel Duffy.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal **RESUELVE**:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada en los términos del presente decisorio, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

**ROGELIO W. VINCENTI**

**JORGE EDUARDO MORÁN**  
**(en disidencia parcial)**

**MARCELO DANIEL DUFFY**

